

Foro de Sociedad Civil **ALC-UE**



INFORME

Foro de la Sociedad Civil ALC-UE 2025

Tabla de contenido

Resumen Ejecutivo	2
Informe completo por sesiones	4
Apertura Institucional	4
Garantizar un Entorno Propicio para la Sociedad Civil: una condición para la democracia, la paz y el desarrollo sostenible en la asociación UE-ALC	4
Financiación para el Desarrollo Sostenible: hacia una agenda birregional justa, equitativa, participativa y transparente	6
Resiliencia Climática Comunitaria: la justicia climática como pilar de la cooperación birregional	8
Transición Digital: no dejar a nadie atrás en la transición digital	9
Crimen Organizado, Corrupción y Democracia: retos birregionales para la seguridad y la paz	10
Gobernanza Indígena y Democracia Birregional: agenda común UE-CELAC rumbo a Santa Marta y la COP30	11
Sistemas Alimentarios sostenibles, inclusivos y resilientes para eliminar el hambre y alcanzar el ODS 2 en la región	13
Pacto Birregional por los Cuidados: el rol de ALC y la UE en la década de acción para la sociedad del cuidado y la igualdad sustantiva de género	14
Cohesión Social e Inclusión frente a las Desigualdades	16
Conclusiones principales y Declaración Conjunta	17
Participación de la Sociedad Civil	19
Cierre Institucional	20
Anexo	22
Declaración Conjunta de la Sociedad Civil ALC-UE	22

Foro de Sociedad Civil ALC-UE

Resumen Ejecutivo

El Foro de la Sociedad Civil ALC-UE 2025, celebrado en Santa Marta los días 7 y 8 de noviembre, reunió a 260 representantes de la sociedad civil, incluidos representantes de pueblos indígenas y organizaciones juveniles, junto a cerca de 100 representantes institucionales de la Unión Europea y América Latina y el Caribe.

La agenda del Foro, incluidos los temas y metodología de las sesiones, y la composición de los paneles, fue diseñado por un grupo de pilotaje seleccionado entre organizaciones del Foro de Políticas Sobre Desarrollo (PFD, por sus siglas en inglés) con un mandato limitado a la planificación de la agenda, en co-creación con la UE y Colombia, y a la elaboración y ratificación de la Declaración Conjunta de la Sociedad Civil (ver Anexo), que recoge las recomendaciones oficiales elaboradas por la sociedad civil en el Foro.

El evento se desarrolló en un momento clave para la asociación birregional, en la antesala de la IV Cumbre CELAC-UE, y puso la participación ciudadana como eje central de la democracia, el desarrollo sostenible y la cooperación.

Mensajes principales:

- Es urgente transformar el desarrollo mediante una cooperación horizontal que priorice los cuidados, la justicia social, la inclusión y la sostenibilidad ambiental.
- Es necesario reformar la arquitectura financiera internacional, garantizar el acceso directo a la financiación para las comunidades y organizaciones de base, y medir el progreso mediante indicadores multidimensionales de bienestar, equidad y participación.
- La transición digital, la ecológica y la protección del medio ambiente no pueden dejar a nadie atrás, reconociendo que pueblos indígenas, mujeres, personas con discapacidad y juventudes son protagonistas clave.
- La libertad de expresión, la protección de defensores de derechos humanos y un entorno habilitante para la sociedad civil son requisitos fundamentales para fortalecer la democracia y el Estado de derecho.
- La alianza UE-ALC sólo será legítima si fomenta una participación auténtica y convierte las promesas en acciones concretas con transparencia y valor añadido para las comunidades.

Los siguientes son los mensajes principales de cada una de las diez sesiones temáticas:

Entorno Propicio para la Sociedad Civil: La reducción del espacio cívico exige renovar pactos sociales, fortalecer la protección de derechos y garantizar un entorno habilitante sustentado en participación significativa, financiamiento sostenible, alianzas horizontales y mecanismos eficaces de vigilancia y alerta temprana.

Financiación para el Desarrollo Sostenible: La estrategia Global Gateway solo podrá contribuir a un desarrollo justo si se orienta al bienestar local, se apoya en una arquitectura financiera internacional más equitativa y transparente, y garantiza una participación real de las comunidades y la sociedad civil en todas las etapas de las inversiones.

Resiliencia Climática Comunitaria: La resiliencia climática solo es efectiva cuando se construye desde las comunidades, integra prevención y adaptación en políticas públicas y se apoya en un financiamiento justo que reconozca las responsabilidades históricas y proteja a las poblaciones más vulnerables.

Foro de Sociedad Civil ALC-UE



Transición digital: Una transición digital justa requiere garantizar conectividad universal y significativa, proteger derechos y datos, fomentar gobernanza inclusiva y promover alfabetización digital que permita a todas las personas participar plenamente en la sociedad y aprovechar la tecnología para el bienestar común.

Crimen Organizado: El crimen organizado socava la democracia y el Estado de derecho; por ello, las políticas efectivas deben ser integrales, preventivas y transversales, combinando medidas de transparencia, educación, cooperación birregional y protección de la sociedad civil para abordar tanto las causas estructurales como la infiltración en instituciones y economías locales.

Pueblos Indígenas: Las inversiones y cooperación birregional deben reconocer a los pueblos indígenas como socios estratégicos y respetar su soberanía. Es fundamental garantizar su participación plena, el respeto a sus conocimientos ancestrales y derechos consuetudinarios, y el consentimiento previo, libre e informado. Este enfoque promueve sostenibilidad, bienestar comunitario y gobernanza inclusiva.

Sistemas Alimentarios y Hambre Cero: La seguridad alimentaria requiere un enfoque integral que combine saberes tradicionales, innovación tecnológica y políticas públicas inclusivas. Jóvenes, mujeres y comunidades rurales deben ser actores centrales en la creación de sistemas alimentarios sostenibles. La justicia alimentaria solo se logra cuando la producción y distribución respetan derechos, territorio y medio ambiente.

Pacto Birregional por los Cuidados: El cuidado debe ser reconocido como derecho humano y trabajo profesional, integrando equidad de género, inclusión y corresponsabilidad social. Su implementación requiere políticas interseccionales que incluyan a mujeres, migrantes, pueblos indígenas y personas con discapacidad. Vincular los cuidados con la acción climática y la transformación sociocultural fortalece la cohesión social y la justicia regional.

Desigualdades y Cohesión Social: Reducir desigualdades requiere un enfoque centrado en las personas, inclusivo e interseccional, que integre salud, educación y protección social. Las políticas y proyectos deben ser horizontales, participativos y medir impactos reales en las comunidades. La redistribución del poder y la cooperación birregional son esenciales para construir sociedades más justas e inclusivas.

Participación de la Sociedad Civil: La defensa de la democracia y del Estado de derecho requiere un espacio cívico amplio, protegido y con participación plena de todas las comunidades. Por ello, las políticas e inversiones deben ser centradas en las personas, con enfoque de derechos humanos, género, sostenibilidad y justicia social. Es esencial asegurar financiamiento sostenible, acceso real a la toma de decisiones, mecanismos de protección y transparencia en el uso de los recursos.

La Declaración Conjunta de la Sociedad Civil (en Anexo) recoge los mensajes y recomendaciones acordados por las organizaciones

Informe completo por sesiones

Apertura Institucional

El moderador, **Félix Fernández-Shaw**, director para América Latina, el Caribe y las Relaciones con todos los Países y Territorios de Ultramar, de la Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG INTPA), Comisión Europea, dio una cálida bienvenida a todos los participantes e inauguró la reunión subrayando el objetivo principal de este Foro: reafirmar la centralidad de la voz de la sociedad civil en el diálogo entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Reiteró la necesidad de fomentar una participación significativa de las organizaciones de la sociedad civil menos representadas, como las asociaciones juveniles, de mujeres, comunidades indígenas y personas con discapacidad.

Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia compartió tres reflexiones clave sobre el diálogo birregional. En primer lugar, destacó la importancia de reconocer la humanidad compartida que une Europa con América Latina y el Caribe, cuya relación ya no se basa exclusivamente en conexiones políticas o económicas, sino en una red viva de afectos, responsabilidades y aprendizajes comunes. En segundo lugar, la ministra enfatizó la necesidad de una cooperación verdaderamente horizontal, señalando que el diálogo es clave para la creación de una cooperación justa que supere las relaciones históricamente asimétricas entre las dos regiones y permitan enfrentarnos a desafíos globales como el cambio climático o la migración forzada. Por último, afirmó que la política exterior no puede seguir siendo un ejercicio de élites, sino que debe construirse desde abajo, con la participación activa de mujeres, pueblos indígenas y jóvenes.

Hadja Lahbib, comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Comisión Europea, recalcó que, en tiempos de reducción del espacio cívico, la Unión Europea sigue considerando el diálogo y la cooperación el mejor enfoque para crear un futuro sostenible para todos. Lahbib subrayó que no puede haber un cambio significativo y duradero sin abordar las causas profundas de las fragilidades y desigualdades, y reiteró la obligación de situar la igualdad como eje central en todos los proyectos de Global Gateway, con el fin de construir sociedades más resilientes.

Andrea Remes, representante del Foro Global de la Juventud, destacó que la cooperación debe ser una red viva de colaboración, donde todas las voces cuentan y las comunidades reciban las herramientas necesarias para generar soluciones sostenibles y replicables en otros contextos. Remes reafirmó que la juventud y la sociedad civil deben ser coautores del cambio, y que la cooperación debe medirse no sólo por indicadores, sino por vidas transformadas. Finalmente, Remes llamó a crear estructuras de participación duraderas, capaces de trascender mandatos y cambios políticos.

Garantizar un Entorno Propicio para la Sociedad Civil: una condición para la democracia, la paz y el desarrollo sostenible en la asociación UE-ALC

Durante esta sesión plenaria moderada por **Javier Azpur**, presidente de la Asociación Nacional de Centros (ANC), el panel fue invitado a reflexionar sobre los peligros de la reducción del espacio cívico. Azpur enfatizó el imperativo de que los gobiernos adopten acciones efectivas para crear un entorno seguro para la sociedad civil y los defensores de derechos humanos.

Por su parte, **Gustavo Adolfo Amaya**, director ejecutivo del Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (CECADE, Red LAC, MODES), señaló que el mundo se enfrenta a nuevos desafíos que requieren soluciones innovadoras. En este contexto, urge establecer nuevos pactos sociales y regionales que generen una respuesta efectiva a guerras, crimen, discursos de odio y transformaciones tecnológicas, recordando que el ciudadano es soberano y responsable del cambio.

Verónica González, miembro de la Comisión Directiva de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), centró su intervención alrededor de la situación de las personas con discapacidades en Argentina. Subrayando cómo las personas con discapacidades están enfrentándose a graves retrocesos en derechos, con barreras de salud, empleo, vivienda y protección frente a la violencia, González denunció el uso de un discurso estigmatizante, políticas restrictivas y graves discriminaciones y obstáculos en servicios reproductivos y de cuidado, entre otros.

Carla Álvarez, representante del Foro Europeo de Juventud, advirtió sobre la inseguridad jurídica desde el punto de vista de las organizaciones juveniles. Destacó la importancia de un reconocimiento jurídico y político real para la juventud, así como de una financiación sostenible y accesible en la que la cooperación vaya más allá del simple aporte económico. Asimismo, la necesidad de un diálogo estructurado y permanente, que genere espacios institucionalizados y periódicos donde los jóvenes no sean solo receptores pasivos. Los órganos juveniles deben ser independientes y estables, ya que la juventud puede transformar estructuras de poder.

Por su parte, **Marta Ferrara**, miembro de la Coordinación Ejecutiva de POJOAJU, Asociación de ONGs, observó que la creación de un ambiente habilitante para la sociedad civil, no solo implica ausencia de represión, sino que requiere actitudes públicas favorables. La creación de este ambiente es responsabilidad conjunta de los gobiernos, del sector privado y de una cooperación bilateral. Hoy en día, las organizaciones están debilitadas por leyes restrictivas, vigilancia, desinformación y crisis de financiamiento.

Sandra Ferrer, directora de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (miembro CONCORD) destacó que el agotamiento del orden global exige alianzas más horizontales, justas y sostenibles, que protejan los valores compartidos y los derechos humanos. La sociedad civil debe tener participación significativa y acceso a financiación flexible y duradera para influir en políticas públicas. Se pidieron cláusulas vinculantes en acuerdos democráticos, transparencia en iniciativas como Global Gateway y evitar impactos negativos en las sociedades locales.

Myriam Ferran, directora general adjunta de DG INTPA, Comisión Europea, respondió a todas estas preocupaciones compartiendo el punto de vista de la Comisión Europea. Reiterando el compromiso de la Comisión Europea en defender los valores compartidos de democracia y libertad, Ferran destacó que hay varios sistemas que permiten no solo el apoyo y la financiación de la sociedad civil, sino el monitoreo de las situaciones de represión para poder intervenir con anticipación. Entre ellos, Ferran mencionó el sistema de vigilancia EU System for an Enabling Environment (EU SEE).

En la segunda parte de la sesión plenaria, los panelistas fueron invitados a reflexionar sobre las formas de revertir las restricciones a la libertad en la participación política.

Gustavo Adolfo Amaya propuso la creación de diálogos entre múltiples actores y potenciar las sinergias con puntos de agenda básica y compartida para poder conseguir apoyo financiero. Verónica González reiteró la necesidad de establecer alianzas y mecanismos de cooperación igual y justa. Carla Álvarez mencionó el derecho de los jóvenes a disfrutar de una plena ciudadanía, el fortalecimiento de su rol como contrapesos democráticos y la introducción de buenas prácticas de cooperación participativa. Marta Ferrara destacó la necesidad de romper paradigmas y crear nuevas estrategias para mantener la participación y sostener una democracia reinventada, mientras Sandra Ferrer enfatizó la importancia de un espacio cívico que permita alerta temprana y respuesta rápida, con intercambio de información y un pacto birregional de cuidados. Myriam Ferran destacó que los proyectos deben ser inclusivos, generar empleos sostenibles locales, crear redes globales y permitir un sistema de monitoreo y respuesta ágil.

Sugerencias para fomentar un Entorno Propicio para la Sociedad Civil:

- Impulsar alianzas igualitarias y justas en la cooperación y en la defensa de los derechos, incluidos los de las personas con discapacidad.
- Introducir cláusulas democráticas vinculantes y mayor transparencia en los acuerdos e iniciativas birregionales, como Global Gateway.
- Reforzar los sistemas de alerta temprana y monitoreo para anticipar y responder a restricciones del espacio cívico.
- Garantizar reconocimiento jurídico, participación estructurada y financiación sostenible para las organizaciones juveniles.
- Asegurar que los proyectos de cooperación sean inclusivos, generen empleo local sostenible y cuenten con mecanismos de respuesta rápida.

Financiación para el Desarrollo Sostenible: hacia una agenda birregional justa, equitativa, participativa y transparente

Moderada por **María José Romero**, gerente de Políticas y Cabildeo, EURODAD, el objetivo de esta sesión fue revisar la estrategia Global Gateway y su estructura financiera para detectar oportunidades y riesgos en justicia social, ambiental y económica, asegurando que la sociedad civil participe en la planificación, seguimiento y sostenibilidad inversiones mediante mecanismos de acceso y rendición de cuentas.

Romero reiteró la instrumentalización por parte de los gobiernos de los sistemas de cooperación internacional, que se convierten en herramientas geopolíticas o en amenazas a los estados autoritarios. En este contexto, aseveró que los recursos públicos no deben priorizar la rentabilidad privada, sino beneficiar a las comunidades locales, ser inclusivos, sostenibles y crear valor añadido al bienestar local. La financiación al desarrollo requiere una arquitectura internacional justa y democrática que democratice la gobernanza y apoye reformas progresivas.

Según **Gloria García-Parra**, directora regional América Latina, Oxfam Internacional, revitalizar el multilateralismo es crucial para fomentar la creación de sociedades más justas e iguales. Hay asimetrías preexistentes entre América Latina, el Caribe, y Europa, que se ven agravadas por las empresas extractivas y por la transición verde europea, financiada a través de una factura climática que recae sobre América del Sur. Por ello, el financiamiento al desarrollo no debe imponerse en forma de deuda, sino que cabe crear un pacto fiscal financiero birregional basado en la justicia tributaria. En este contexto, el pacto birregional debe presentarse como un pacto de justicia, mucho más que de mera ayuda o cooperación.

Desde la fila 0, **Javier García de la Oliva**, ActionAid International, intervino subrayando la necesidad de definición de herramientas reales de financiamiento para el desarrollo, que respondan a desigualdades profundas y a los efectos cada vez más severos de la crisis climática. Expresó la urgencia de avanzar hacia un nuevo sistema financiero internacional que garantice acceso justo, equitativo e inclusivo a los países de América Latina y el Caribe, además de inversiones en servicios públicos esenciales (salud, educación y protección social) que generen oportunidades equitativas. Además, es imprescindible romper el círculo entre deuda y cambio climático, evitando que los países deban endeudarse en condiciones injustas y recurrir al extractivismo para pagar.

Eleonora Betancur González, directora general de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC), Colombia, reafirmó la necesidad de reformar la arquitectura financiera global. Pese a sus desigualdades estructurales que hacen a América Latina y el Caribe la región más desigual en términos de distribución de riqueza, la región recibe menos apoyo por criterios basados en el PIB. Por ello, es imperativo introducir indicadores de bienestar multidimensionales. Además, la cooperación debe ser más horizontal e innovadora, combinando recursos financieros con intercambio de conocimiento. La UE, como principal donante, debe promover instrumentos financieros sostenibles que fortalezcan la rendición de cuentas.

Reportando el punto de vista de la Unión Comisión Europea (DG. INTPA), **Félix Fernández-Shaw**, declaró que una de las prioridades comunes de América Latina y la UE es la descarbonización y la electrificación del transporte urbano e interurbano como vía justa y limpia hacia una mejor calidad de vida. La UE Europa está reinvertiendo en la región mediante formación tecnológica y apoyo a comunidades indígenas para un desarrollo sostenible. Sin embargo, debe también proteger sus intereses, ya que sus empresas compiten con actores globales sin las mismas exigencias ambientales.

Miguel Santibañez, consejero de Asuntos Exteriores, de la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales ACCION, sostuvo que una parte significativa de los pagos de la deuda pública está vinculada a los efectos del cambio climático. La deuda y la crisis climática están estrechamente relacionadas: los países más afectados por el cambio climático deben endeudarse en dólares para financiar su adaptación, lo que los obliga a depender de industrias extractivas que, a su vez, agravan los problemas ambientales. Además, la austeridad limita la inversión en servicios públicos esenciales como la salud y la educación, lo que frena el progreso de la región.

Alejandra Vargas, responsable de país, LATIMPACTO, destacó la importancia de una alianza multiactor que fortalezca la coordinación entre gobiernos, sociedad civil, bancos de desarrollo y filantropía para movilizar recursos y conocimiento. Subrayó la necesidad de una gobernanza regional inclusiva, con participación de

comunidades locales e indígenas. La filantropía puede desempeñar un papel catalítico mediante capital paciente y flexible que impulse innovación y cooperación. La combinación de capital filantrópico y bancos de desarrollo puede reducir riesgos y atraer inversión privada, multiplicando el impacto climático.

Desde la fila 0, **Diana Quimbai**, directora de país, Ayuda en Acción, destacó que iniciativas como Global Gateway deben reconocer a la sociedad civil como actor clave para desplegar capital catalítico, pues es quien identifica oportunidades, acompaña a emprendedores y articula alianzas locales. Señaló vacíos críticos de financiación temprana debido al alto riesgo y retornos inciertos, proponiendo impulsar el instrumento Boosting Opportunities como capital semilla combinado con acompañamiento técnico y coinversión público-privada. Recalcó que Global Gateway tiene la oportunidad de cerrar estas brechas y dar a la sociedad civil un rol protagonista en iniciativas transformadoras. Para ello, pidió adoptar una lógica “impact first”, diseñar instrumentos financieros flexibles para etapas tempranas y crear mecanismos de participación estructurada en toda la planificación y seguimiento de proyectos.

Jorge Coronado, miembro del Consejo Directivo, LATINDADD (Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática) también expresó preocupación sobre los métodos de financiación europea en América Latina y el Caribe, que según él se centra en sectores privatizados como energía, agua o telecomunicaciones, reproduciendo lógicas de mercado con bajos estándares y riesgos de corrupción. Asimismo, mencionó la necesidad de promover un desarrollo con valor añadido, fortaleciendo leyes ambientales, de transparencia y participación ciudadana, y un contexto político de institucionalización y protección de la sociedad civil.

Ramiro López-Ghio, representante del Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo) en Colombia añadió que, en el contexto de las inversiones europeas en América Latina, es imperativo elevar los estándares de inversión, garantizando transparencia y protección a las comunidades. América Latina y el Caribe necesitan inversiones que generen desarrollo sostenible e inclusivo.

En la segunda parte de la intervención, los panelistas llamaron a una cooperación birregional basada en justicia fiscal, climática y social. Coincidieron en que la relación entre Europa y América Latina sigue marcada por asimetrías y falta de transparencia, donde los beneficios del libre comercio no siempre llegan a las comunidades. Por ello, se reiteró la necesidad de que la Agenda de Inversiones UE-ALC Global Gateway refleje los intereses locales, con mecanismos de retroalimentación efectivos y participación con incidencia. A la vez, mantuvieron el imperativo de proteger derechos laborales y sociales, evitar la criminalización de defensores de derechos humanos y articular capitales diversos para un desarrollo justo.

Sugerencias sobre Financiación para el Desarrollo Sostenible:

- Incrementar la inversión en servicios públicos esenciales (salud, educación, protección social) como vía para crear oportunidades reales para mujeres, pueblos indígenas y personas históricamente excluidas.
- Reformar la arquitectura financiera internacional, incorporando criterios de bienestar multidimensional y garantizando acceso justo, equitativo e inclusivo al financiamiento para América Latina y el Caribe.
- Asegurar condiciones de financiamiento más justas, evitando endeudamiento en dólares o con tasas elevadas que empujen a los países hacia modelos extractivistas.
- Impulsar un pacto fiscal y financiero birregional basado en la justicia tributaria, evitando que el financiamiento al desarrollo adopte formas de deuda que profundicen desigualdades.
- Elevar los estándares de inversión europea en la región, garantizando transparencia, protección de comunidades y fortalecimiento de leyes ambientales y de participación ciudadana.
- Adoptar un enfoque “impact first” dentro de Global Gateway, priorizando el impacto social, ambiental y comunitario mediante instrumentos financieros flexibles que cubran las brechas de financiación temprana y apoyen modelos híbridos y empresas sociales.
- Crear mecanismos de participación estructurada en la planificación y seguimiento de proyectos, junto con instrumentos financieros flexibles orientados al impacto, especialmente para etapas tempranas.

Resiliencia Climática Comunitaria: la justicia climática como pilar de la cooperación birregional

Este panel, moderado por **Aura Elizabeth Rodríguez Bonilla**, directora de Viva la Ciudadanía y secretaria técnica de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, se centró en mostrar experiencias locales de respuesta a la crisis climática, y presentar buenas prácticas de transformación que puedan generar un impacto evidente en las comunidades más afectadas. Además, el panel reiteró la importancia del concepto de justicia climática, así como la necesidad de proponer principios de integración de la adaptación climática y la reducción del riesgo de desastres en las agendas de ambas regiones.

Lidia Serrano, coordinadora de proyectos, ACICAFOC, abordó el tema desde la perspectiva de la resistencia comunitaria y la adaptación basada en ecosistemas y saberes ancestrales. Para construir una verdadera resiliencia climática, cabe realizar un proceso de planificación comunitaria para la conservación y el desarrollo, a partir de un consentimiento previo, libre e informado. En segundo lugar, crear sistemas agroforestales y prácticas de agricultura resiliente para garantizar la seguridad alimentaria. También es imperativo generar mecanismos de compensación comunitaria y, por último, crear espacios de gobernanza inclusiva. Serrano reiteró que no hay resiliencia sin justicia: por ello, los procesos deben ser participativos, respetar el conocimiento local y ancestral y asegurar que la justicia sea distributiva.

Desde la mirada de la Comisión Europea, **Ana María de la Torre**, oficial de programas para América del Sur, DG ECHO LAC, expresó que la resiliencia climática debe ser un proceso integrador de prevención, preparación y recuperación con una visión sistémica que conecte las comunidades locales y los marcos de cooperación regional. Por ello, es necesario invertir en análisis de riesgo, sensibilizar la ciudadanía para promover una cultura de prevención y gestión del riesgo, e incluir a las comunidades en la reconstrucción, para la sostenibilidad y eficacia de las intervenciones.

Olivia Chase, especialista senior en Desarrollo, Centro Caribeño de Desarrollo de Políticas (CPDC), abordó los desastres climáticos desde la perspectiva de las islas del Caribe, con poblaciones pequeñas y economías muy dependientes del turismo. Chase explicó que estas islas, enfrentan gran vulnerabilidad ante desastres climáticos que destruyen su principal fuente de ingresos. Además, las crisis aumentan su deuda y afectan su PIB, por lo que es fundamental introducir nuevas formas de financiamiento para la reconstrucción, suspender pagos de intereses, crear fondos de mitigación climática y aplicar tasas justas tras desastres. Chase también abogó por eliminar deudas ligadas a la recuperación y fomentar préstamos que fortalezcan la resiliencia.

James Trinder, coordinador de Políticas Climáticas Internacionales, Red Europea de Acción Climática (CAN), destacó la importancia de reconocer la responsabilidad histórica del cambio climático y de demandar una respuesta equitativa en la agenda conjunta. Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer la capacidad adaptativa frente al cambio climático, lo que implicaría no solo aumentar el presupuesto destinado a la gestión del riesgo y la adaptación, sino también garantizar el acceso al agua, la alimentación y la salud. Trinder advirtió que la gobernanza climática global sigue siendo demasiado dependiente de las soluciones de mercado, por lo que resulta imperativo construir una arquitectura diplomática global de resistencia climática.

Finalmente, **Nelson Hernández**, profesional especializado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), presentó la política colombiana de gestión del riesgo, la cual no se limita a la respuesta a los desastres climáticos, sino que incorpora la prevención. La gestión del riesgo tiene una componente de corresponsabilidad, ya que se construye entre lo público, lo privado y las comunidades. Por eso, el principio de buena gobernanza implica participación.

Sugerencias para fomentar la Resiliencia Climática Comunitaria:

- Impulsar sistemas agroforestales y prácticas de agricultura resiliente que fortalezcan la seguridad alimentaria en comunidades vulnerables.
- Invertir en análisis de riesgo y en la sensibilización ciudadana para promover una cultura de prevención y gestión del riesgo.
- Introducir nuevos mecanismos de financiamiento para la reconstrucción y resiliencia, incluyendo suspensión de pagos de intereses, fondos de mitigación climática y condonación o eliminación de deudas ligadas a desastres.
- Aumentar los recursos destinados a adaptación y gestión del riesgo, garantizando acceso al agua, alimentación y salud en contextos de crisis climática.

Transición Digital: no dejar a nadie atrás en la transición digital

La moderadora de la sesión **Fernanda Martins**, directora de Estrategia e Incidencia, Fundación Multitudes, abrió el panel explicando que la construcción de una transición digital justa requiere espacios abiertos, plurales y comprometidos con el bien común. En un contexto de reducción del espacio cívico, resulta urgente construir una agenda digital que coloque a las personas y sus derechos en el centro. Es necesario borrar la línea entre los derechos fundamentales y los derechos digitales, reconociendo su interdependencia.

Olga Paz, directora de Proyectos, Colnodo, abordó la transición digital desde la seguridad digital, destacando que en América Latina y el Caribe el 40% de la población aún no tiene acceso a internet, especialmente mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, mayores y comunidades rurales. Subrayó que internet es un facilitador de derechos, pero la falta de conectividad significativa profundiza las desigualdades sociales y económicas. Cerrar la brecha digital es esencial para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que requiere transformar los modelos de telecomunicación y apostar por estrategias innovadoras y sostenibles. Propuso modelos comunitarios de conectividad, basados en la colaboración y participación local, e insistió en que las mujeres deben tener un papel activo en la administración, creación de contenido y liderazgo de estas redes.

Durante su intervención, **Luis Elicer Cadenas**, director ejecutivo, Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas, advirtió sobre la profundización de las desigualdades preexistentes que la revolución digital puede conllevar, sobre todo en grupos sociales como el de los jóvenes. En este caso, las brechas sociales en la distribución al acceso de infraestructura digital son aún más graves que la ausencia de escuelas físicas, pues limita el acceso a contenidos y recursos esenciales para el aprendizaje. En este sentido, la sociedad se estratifica entre quienes tienen acceso tecnológico y quienes no, afectando la formación de capital humano digital. Por ello, es fundamental introducir una visión sistémica que integre conectividad, generación de contenido y cooperación entre actores, a través de mecanismos de cooperación, coinversión y cofinanciación dentro de modelos de gobernanza inclusivos.

Marina Meira, Coordinadora de Políticas Públicas en Derechos Digitales, también reiteró que la transición digital no solo profundiza desigualdades existentes, sino que empeora la marginalización socio-técnica de sectores sociales enteros, ya que la transición digital, conlleva diferentes riesgos para diferentes segmentos sociales. Por ejemplo, riesgos de abuso, uso inadecuado de datos y explotación comercial, acceso a contenido inadecuado, discursos de odio o difusión de imágenes íntimas. En general, la falta de conectividad puede exacerbar la exclusión social de grupos ya marginalizados. Por eso, Meira propuso, entre otras medidas, la estandarización de las leyes de protección de datos, el control de la veracidad de información, una mayor transparencia sobre las empresas que desarrollan las tecnologías y una mayor participación de la sociedad civil en la transición digital.

En la segunda parte de la sesión, los participantes fueron divididos en tres mesas, donde discutieron los tres ejes clave para una la transición digital justa: el acceso universal y la conectividad, la protección de datos y la seguridad frente a las formas de violencia digital, y la alfabetización e inclusión digital como pilares de la justicia social en el entorno digital. Los participantes, abogaron por una conectividad significativa, suficiente y no precaria, que empiece primero por el acceso a la tecnología y por la inclusión social. Además, insistieron en la necesidad de educar a la población no solamente para generar capacidad digital y empleo, sino también para reforzar el pensamiento crítico y filosófico y poder usar la tecnología con una mirada reflexiva. Por último, enfatizaron el potencial que la tecnología puede aportar en el marco de la lucha contra el cambio climático.

Sugerencias para no dejar a nadie atrás en la Transición Digital:

- Garantizar acceso universal y significativo a internet, priorizando a mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, comunidades rurales y sectores socialmente marginados.
- Fomentar modelos comunitarios de conectividad y gobernanza inclusiva, promoviendo participación local en la administración, creación de contenido y liderazgo digital.
- Establecer normas claras de protección de datos y seguridad digital, incluyendo control de veracidad de información, transparencia empresarial y mecanismos de prevención de violencia digital.
- Impulsar alfabetización e inclusión digital, combinando desarrollo de capacidades, pensamiento crítico y conciencia social, para que la tecnología contribuya al bienestar y la justicia social.

Crimen Organizado, Corrupción y Democracia: retos birregionales para la seguridad y la paz

El moderador **Ramiro Orias**, director de Programas, Fundación Debido Progreso, abrió la sesión subrayando que comprender cómo el crimen organizado está afectando los sistemas políticos de ambas regiones se ha convertido en un desafío crucial para las democracias de América Latina, el Caribe y Europa. En las últimas décadas, las actividades del crimen organizado se han diversificado y sofisticado, generando nuevos patrones delictivos que se alimentan de la corrupción intrínseca de los gobiernos. Además, existe una creciente penetración del crimen en los sistemas policiales. El debilitamiento de las estructuras democráticas, debido a esta infiltración, plantea la necesidad de reconsiderar las políticas de combate al crimen organizado.

Lilia Saul, periodista de investigación, Proyecto sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP), explicó que el éxito del narcotráfico se debe, entre otros factores, a la profunda infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado. Para respaldar su tesis, Saúl presentó el proyecto “Narcofiles”, que demostró que en México, numerosos funcionarios estaban involucrados en redes de tráfico de drogas y lavado de dinero. Asimismo, señaló que las autoridades mexicanas se negaron a entregar documentos oficiales de narcotraficantes y a colaborar con la investigación periodística, evidenciando la falta de cooperación estatal orientada a proteger al crimen organizado, dada su profunda inserción en las estructuras del poder político.

Por su parte, la antropóloga **Augusta Moreno Quant**, investigadora, Fundación Paz y Reconciliación (PARES) también reiteró que la corrupción estatal es el principal motor del crimen organizado, ya que permite la impunidad judicial. En la actualidad, las organizaciones criminales invierten en actividades y empresas fachada, tanto en Europa como en América del Sur, a través de las cuales no solo blanquean recursos, sino que también adquieren legitimidad institucional y fuerza paramilitar, lo que en muchos casos les permite ejercer control sobre determinadas regiones. En diversos contextos, incluso la prensa contribuye, de manera indirecta, a otorgar legitimidad a estas estructuras paraestatales del crimen organizado.

Andrés Hernández, director ejecutivo, Transparencia por Colombia, confirmó que la debilidad institucional facilita el desarrollo del crimen organizado, generando un terreno para su expansión. Asimismo, advirtió que una de las dimensiones más preocupantes del fenómeno es su carácter transnacional, ya que afecta distintos mercados en diversas regiones y alcanza proporciones significativas. Esto representa un enorme desafío para los sistemas democráticos, entre otros motivos, por el impacto que tiene en la reducción del espacio cívico, en la limitación del acceso a información pública y al control que ejerce sobre los órganos de ejercicio del poder.

Liliana Ramírez Hinojosa, líderesa sobre Derechos Humanos, abordó el problema desde la perspectiva del reclutamiento forzado que encuentra terreno fértil en contextos de pobreza y marginalidad, especialmente entre comunidades indígenas y vulnerables, focos de victimización y instrumentalización. En estos entornos, la precariedad del acceso a recursos transforma la vinculación con grupos armados en una alternativa para alcanzar una vida digna. Por ello, niños y niñas son cada vez más reclutados en estos sistemas de trabajo informal e ilegal.

Abraham Ábrego, director legal de Cristosal, presentó el caso del Salvador, donde el estado emplea la violencia como instrumento de represión del crimen organizado, evitando abordar las verdaderas causas estructurales de la criminalidad, como la pobreza y la exclusión social. Por ello, las políticas de represión constituyen una respuesta electoral y a corto plazo, que suelen encontrar aceptación en la población, que inconscientemente asume el riesgo de sacrificar las garantías democráticas en nombre de una aparente política de seguridad eficaz.

Javier Samper Orgilés, director EL PAcCTO 2.0 (Programa UE de Asistencia Contra el Crimen Organizado) explicó que el diagnóstico de los desafíos frente a la macro y micro criminalidad revela un problema de escala y comprensión: la macrocriminalidad requiere respuestas estructuradas y coordinadas, ya que amenaza directamente el Estado de derecho. Esto requiere una articulación más amplia de política pública, integrando justicia y seguridad en todos los sectores, incluso los ajenos a estas áreas, que deben incorporar la prevención del crimen organizado en su labor cotidiana. La infiltración total del crimen en las instituciones y la economía requiere un enfoque preventivo transversal en toda política pública.

En la segunda parte de la intervención, los panelistas fueron invitados a reflexionar sobre las acciones y estrategias necesarias para fortalecer las prácticas de transparencia y rendición de cuentas en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado.

Lilia Saúl señaló la importancia de hacer que la información sea pública, transparente y fácilmente asequible en todos los países, y que las autoridades quiten el velo de opacidad que rodea muchos casos de criminalidad organizada. Por su parte, Augusta Moreno Quant, hizo hincapié en la necesidad de una estrategia de seguridad que combine medidas sociales y académicas, respetando los derechos humanos y la soberanía. Asimismo, subrayó la necesidad de cooperación interdepartamental y birregional, y de situar a la sociedad civil como protagonista central en los procesos de diálogo y prevención, garantizando su protección y seguridad.

Desde el punto de vista del rastreo de dinero de actividades ilícitas, Andrés Hernández Señaló la importancia de fortalecer la cooperación entre autoridades y la responsabilización de los facilitadores de la corrupción, como bancos, abogados y auditores. Asimismo, advirtió sobre las amenazas a personas defensoras de derechos humanos y destacó que mientras el crimen organizado continúe garantizando servicios, los avances en la problemática serán limitados. Desde la perspectiva de Liliana Ramírez Hinojosa, es prioritario desarrollar políticas públicas con un enfoque educativo y preventivo, en lugar de punitivo. Además, conviene fortalecer la participación de la juventud en la propuesta de acciones dirigidas a su bienestar.

En conclusión, Ramiro Orias señaló que la inseguridad es un problema multidimensional y advirtió que atacar únicamente la base del crimen organizado no afecta a las estructuras mayores. Propuso que en la UE se discuta el uso del discurso del odio y la figura del enemigo como estrategia para invisibilizar los problemas del país, señalando que el uso del terrorismo como herramienta para descalificar a la oposición contribuye a la criminalización.

Con respecto a Javier Samper Orgilés, un enfoque de seguridad integral solo es efectivo si se aplica concretamente contra el crimen organizado y se interconectan diálogo político, sistemas de datos y normativa. Además, advirtió que la debilidad de instituciones como policía y fiscalía limita cualquier acción.

Sugerencias para luchar contra el Crimen Organizado y la Corrupción:

- Fortalecer la transparencia y acceso público a la información sobre actividades del crimen organizado y su financiación, eliminando la opacidad en todos los niveles.
- Desarrollar políticas públicas preventivas e integrales, que combinen educación, bienestar social y participación juvenil para reducir la vulnerabilidad frente al crimen organizado.
- Garantizar la protección de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, involucrándolos en procesos de prevención y monitoreo del crimen organizado.
- Promover cooperación birregional e interinstitucional, incluyendo policía, fiscalía, sistemas de datos y organismos académicos, para abordar la infiltración del crimen en instituciones y economías locales.
- Responsabilizar a facilitadores de la corrupción, como bancos, auditores y abogados, para evitar que el crimen organizado utilice estructuras legales o económicas para legitimarse.

Gobernanza Indígena y Democracia Birregional: agenda común UE–CELAC rumbo a Santa Marta y la COP30

Moderada por **Fany Kuiru Castro**, coordinadora general de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) la sesión temática abordaba el objetivo de definir una propuesta conjunta con la agenda indígena, así como reconocer a los pueblos indígenas como socios estratégicos y fundamentales en la alianza EU-LAC. En este contexto, los panelistas redefinieron el marco “Global Gateway” como la “Puerta Global para el Buen Vivir”, que se convierte en un instrumento que impulse la creación de un vínculo real entre las partes, que supere las lógicas de donante y receptor y cree bienestar y valor añadido para las comunidades de ambas regiones. Desde el enfoque del cambio climático, Fanny Kuiro Castro insistió en que la UE y la CELAC deben asumir un compromiso global para proteger la región amazónica. Por esa razón, presentó la iniciativa 80x30 para proteger el 80% de la Amazonía, destacando que superar niveles de deforestación del 27% llevaría al punto de no retorno. Siendo los pueblos indígenas los más afectados por el cambio climático, enfatizó la necesidad de considerarlos actores estratégicos en la definición de las políticas públicas orientadas a la restauración integral de la Amazonía.

Hortencia Hidalgo, representante del Foro Indígena Abya Yala / Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad (RMIB) abordó el tema desde la perspectiva de los sistemas propios de gobernanza indígena, que constituyen la base de una democracia constitutiva paritaria que permite la autodeterminación, el desarrollo social, económico y cultural. Hidalgo explicó que en los sistemas de gobernanza indígena, la toma de decisiones es colectiva para mantener la armonía comunitaria y resolver conflictos. Los estilos de gobernanza se basan en los usos, costumbres y derechos consuetudinarios, con autoridades elegidas por la comunidad y orientadas al desarrollo colectivo. Por otro lado, Hidalgo explicó que la gobernanza indígena debe basarse en un enfoque interseccional e intercultural, respetando las formas de autodeterminación de los pueblos indígenas. Las decisiones en política pública deben reflejar las necesidades de los territorios y de las poblaciones locales. Por ello, los conocimientos de los pueblos indígenas no solo deben valorarse al mismo nivel del conocimiento científico, sino que las actividades de extractivismo no deberían realizarse sin la consulta previa de las poblaciones autóctonas locales.

Desde el punto de vista de **Anne-Gaël Bilhaut**, representante para Ecuador y Colombia, Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), un eje fundamental de la Agenda 2030 es la voluntad de los países de reafirmar la importancia de no dejar a nadie atrás, y de considerar a las poblaciones locales como socios soberanos frente a las crisis compartidas, como la climática. Por esta razón, construir una colaboración genuina con los pueblos indígenas se hace imprescindible para compartir conocimientos y generar soluciones efectivas. La cooperación horizontal requiere integrar la diplomacia científica e indígena, compartiendo poder decisional y financiando a los coautores del cambio de manera directa. Con este fin, cabe garantizar seguridad jurídica, física y financiera a estas comunidades, además de establecer diálogos de pares, codiseñar proyectos de innovación e implicar a los pueblos indígenas en todas las fases de ellos, desde su concepción hasta la evaluación.

Delcy Medina, representante del Gobierno Autónomo Guaraní Charagua Iyambae, con experiencia en primera línea en conservación de áreas protegidas bajo las autoridades indígenas en la región del Chaco, solicitó a la UE acompañamiento para enfrentar los desafíos del cambio climático mediante proyectos amigables con la naturaleza. Como otros panelistas, Medina subrayó la importancia de que los financiamientos lleguen directamente a las comunidades locales, que puedan administrar los recursos con transparencia, ya que los gobiernos autónomos indígenas cuentan con una ley de consulta que asegura procesos libres, informados y completos.

Luisa Fernanda Gallo, oficial de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Colombia explicó cómo el enfoque de Global Gateway, que combina inversiones en infraestructura “dura” y “blanda”, rompe con los mecanismos de cooperación vertical, promoviendo la participación efectiva de la sociedad civil y de los pueblos indígenas en todos los proyectos. La estrategia fortalece capacidades locales y reconoce que la sociedad civil tiene un rol fundamental para generar valor agregado. Se basa en principios de sostenibilidad, asociaciones igualitarias y respeto al conocimiento ancestral y la diversidad cultural. Ejemplos efectivos de proyectos en el marco Global Gateway de colaboración con sociedad civil y comunidades indígenas incluyen la creación de redes de internet comunitarias en Colombia y la colaboración en Barbados para la lucha contra el sargazo.

En el marco de la inclusión de los pueblos indígenas en el enfoque de Global Gateway, **Kiwar Maigua**, coordinador de proyectos en Fundación KISTH advirtió sobre los riesgos que estas inversiones pueden conllevar. Entre ellos, contaminación y pérdida de control sobre recursos, por lo que se requiere participación directa de los indígenas en la supervisión y acuerdos de beneficio mutuo. Los proyectos europeos deben garantizar consentimiento previo, libre e informado, evitando vulnerar derechos por ganancias ajenas.

En conclusión, desde la fila 0, **Gina Tambini**, Representante en Colombia de la Organización Panamericana de la Salud, señaló que los pueblos indígenas enfrentan graves desafíos de salud, con tasas más altas de mortalidad materna, mortalidad infantil y suicidio. Destacó la necesidad de reconocer sus conocimientos y crear espacios para incorporarlos en la cooperación internacional. Subrayó la importancia de facilitar plataformas de intercambio y apoyo mutuo, y recordó que la OPS, mediante su política de salud indígena, trabaja activamente para fortalecer la gobernanza. Indicó que, en este contexto, es imperativo avanzar conjuntamente hacia una gobernanza en salud que incluya plenamente a los pueblos indígenas.

Sugerencias para apoyar la Gobernanza Indígena:

- Garantizar que los proyectos incluyan a los pueblos indígenas desde la concepción hasta la evaluación, asegurando su participación directa y efectiva y respetando los conocimientos ancestrales y sistemas de gobernanza indígena en el diseño de políticas y proyectos.
- Implementar el consentimiento previo, libre e informado en todas las intervenciones que afecten territorios o recursos indígenas.
- Asegurar que los financiamientos lleguen directamente a las comunidades, con transparencia y gestión local de recursos.
- Fortalecer la gobernanza en salud, ambiental y social de las comunidades indígenas, incluyendo plataformas de intercambio y apoyo mutuo.

Sistemas Alimentarios sostenibles, inclusivos y resilientes para eliminar el hambre y alcanzar el ODS 2 en la región

Esta sesión, moderada por **Danilo Salerno**, director regional Américas, Alianza Cooperativa Internacional-LAC tuvo el objetivo de fortalecer el diálogo intergeneracional e intercultural entre diversos actores para compartir experiencias y buenas prácticas que promuevan la seguridad alimentaria y nutricional mediante un enfoque de derechos humanos y sostenibilidad ambiental.

En el ámbito de la seguridad alimentaria **Michela Espinosa**, oficial senior y coordinadora del área de Mejor Nutrición, FAO, explicó que muchos indicadores demuestran que hay un retroceso en la calidad de la nutrición. Las comunidades no solo sufren de hambre, sino también de obesidad, de deficiencia de micronutrientes, o de dificultad en el acceso a una dieta sana y balanceada. Para enfrentarse a estos problemas, es imperativo buscar respuestas combinadas: con políticas monetarias y fiscales coherentes, reformas económicas para rescatar la cultura alimentaria y los saberes tradicionales e inversión en desarrollo rural, enseñanza de calidad e infraestructura asequible, entre otras cosas.

Alejandra Claros Borda, secretaria general, CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) explicó que la estrategia de CAF a la seguridad alimentaria se centra en identificar los grandes problemas del sistema alimentario en América Latina y Caribe y trabajar con las comunidades, no para ellas, apoyándose en instituciones como la FAO y en la sociedad civil. En este contexto, CAF busca rescatar los saberes y la cultura alimentaria, que según Claros Borda está en las manos de las mujeres y de las comunidades rurales. Además, un enfoque fundamental es la promoción y el desarrollo de la infraestructura, como carreteras y transporte, para llevar tecnología a las zonas rurales y facilitar el acceso de los productos del campo al mercado, fortaleciendo el sistema alimentario regional.

Silvia Becerra, directora de Capacitación y Generación de Ingresos, Ministerio de Agricultura de Colombia habló de las medidas empleadas por el Ministerio de Agricultura de Colombia como, por ejemplo, el trabajo en alianzas para reducir el hambre a partir de un enfoque integral, que conecta la alimentación con la reforma agraria y el acceso a la tierra. Entre las acciones, destacó la redistribución de tierras a pequeños productores, la restauración de suelos degradados y el impulso a una transición agroecológica que recupere la capacidad productiva del país. También subrayó la importancia de fortalecer la organización campesina y crear territorios que protejan y aprovechen el suelo de forma sostenible. Enfrentar los efectos del cambio climático requiere, añadió, asistencia técnica, ordenamiento de la propiedad y mejor planificación agrícola. En estos marcos, el gobierno articula activamente estas medidas con la Unión Europea a través de acuerdos comerciales, financiamientos y a través de enfoques como el Pacto Verde Europeo, que, en Colombia, busca apoyar la sostenibilidad alimentaria.

Sebastián Pedraza, presidente del Comité Directivo y coordinador para América Latina y el Caribe, YPARD (Jóvenes profesionales por el desarrollo agrario), explicó la importancia de la inclusión de los jóvenes en las arquitecturas agroalimentarias internacionales. Además, propuso desarrollar proyectos de capacidades con enfoque tecnológico, combinando la innovación con los saberes tradicionales de las comunidades para crear sistemas alimentarios sostenibles. También, remarcó la importancia de que la agroecología se promueva desde las mismas leyes, y que se sensibilice a la juventud sobre la importancia de consumir productos sanos y locales. También introdujo el concepto de dieta planetaria, la que supone promover nuevos tipos de consumo y que los jóvenes sean centrales en este tipo de iniciativas.

Claudio Soumoulo, presidente, Fundación Nodos – Grupo Asociación de Cooperativas Argentinas, llevó la perspectiva de las realidades cooperativas. Según él, la solución se centra en el asociativismo. El trabajo cooperativo en el sector agropecuario, permite la creación de un ecosistema que tiene en cuenta las necesidades de los productores, desarrolla iniciativa de formación de jóvenes, y busca revivir la cultura cooperativa y la valorización del producto local.

Desde el público se recordó que el hambre no es una fatalidad, sino el resultado de modelos económicos capitalistas dominados por lógicas de mercado que concentran los bienes en pocas manos. Los Estados no solo deben garantizar el acceso a agua y tierras y construir políticas agroalimentarias con enfoque humano, sino también reconocer que la justicia alimentaria no puede lograrse mientras se firmen tratados que favorecen la deforestación o el acaparamiento de tierras.

Sugerencias para fomentar Sistemas Alimentarios sostenibles, inclusivos y resilientes para eliminar el hambre y alcanzar el ODS 2 en la región:

- Impulsar agroecología, asociativismo y cooperativismo para fortalecer la producción local y la resiliencia comunitaria.
- Promover infraestructura rural y logística que conecte producción con mercado, garantizando acceso a alimentos saludables y sostenibles.
- Integrar saberes tradicionales con innovación tecnológica, fomentando la educación y transferencia de capacidades en comunidades locales.
- Implementar políticas públicas que aseguren acceso equitativo a tierras, agua y recursos naturales, combatiendo la concentración y deforestación.
- Desarrollar estrategias de consumo responsable, incluyendo la promoción de dietas locales y planetarias, y sensibilizar sobre su impacto social y ambiental.

Pacto Birregional por los Cuidados: el rol de ALC y la UE en la década de acción para la sociedad del cuidado y la igualdad sustantiva de género

Alberto Brunori, director de la Fundación EU-LAC, condujo este panel con el propósito de examinar el Pacto Birregional por los Cuidados y su plan de implementación, evaluando la propuesta desde la visión de la sociedad civil. Según Brunori, el cuidado debe ser un eje transversal y el trabajo de cuidados debe reconocerse profesionalmente, abordando también la violencia política que enfrentan quienes lo promueven.

Abrió la discusión **Christian Burgsmüller**, jefe de la División Américas.1 (Asuntos Regionales) en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que felicitó a la sociedad civil por haber logrado un resultado tan importante como la definición del Pacto de Cuidados, que definió una victoria para el multilateralismo. Burgsmüller dijo que la UE, que sufre una crisis demográfica importante, puede importar varias buenas prácticas de América Latina y el Caribe. El papel de las cuidadoras es fundamental en ambas regiones, por lo que es necesario compartir conocimiento y desarrollar políticas de protección del cuidado en conjunto. La prioridad, ahora, es concretar el Pacto por los Cuidados en acciones efectivas.

Eleonora Betancur, directora general de Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC) señaló que la sociedad civil juega un papel clave en impulsar la agenda de cuidados dentro de la cooperación CELAC-UE, promoviendo avances sustantivos en equidad. El pacto birregional funciona como puente de diálogo y permite reconocer el cuidado como derecho humano, pero, no puede ser efectivo si no aborda la discriminación hacia mujeres migrantes y personas con discapacidad desde un enfoque de igualdad e interdependencia.

Los resultados se logran gracias a las alianzas, ya que las transformaciones no se alcanzan de manera aislada. Lo dijo **Bibiana Aido Almagro**, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, según la cual sin sostenibilidad no hay desarrollo ni democracia. El compromiso de los estados debe centrarse en la creación de un sistema bilateral que garantice recursos suficientes, financiamiento directo y la reducción de privilegios fiscales. Sin embargo, tanto organismos internacionales como la sociedad civil deben proteger la agenda para evitar su instrumentalización.

Siguió la discusión **Ana Cristina González Vélez**, cofundadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que explicó que las desigualdades de género se sustentan en la división sexual del trabajo, donde el



cuidado no remunerado sobrecarga a las mujeres y limita sus autonomías físicas y reproductivas, afectando también sus derechos sexuales. Señaló que las organizaciones feministas, pioneras en poner el cuidado al centro del debate deben permanecer activas e incluidas en todos los niveles de implementación del pacto.

Olga Montúfar, presidenta de Red de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes con Discapacidad LAC (REMIAD), declaró que en el ámbito de la discapacidad y de las comunidades indígenas el cuidado se convierte en un acto político y de resistencia. Al referirse al pacto birregional, subrayó la necesidad de asegurar la plena inclusión en la formulación de políticas de cuidado y en la construcción de los sistemas de cuidados a los que lo brindan. Por ello, propuso crear órganos de valoración del cuidado y fondos de inversión para apoyar la economía del cuidado, recordando que sin recursos este derecho queda solo en el discurso. Finalmente, enfatizó que invertir en cuidados es invertir en cohesión social y en una humanidad real, y que las mujeres indígenas no son beneficiarias pasivas, sino impulsoras del cambio.

Josefina Sánchez, presidenta de Cooperativa de Cuidados Domésticos “Soltecha”, señaló que, en América Latina, los mandatos sociales patriarcales asignan el rol del cuidado a las mujeres, haciendo la división sexual del trabajo más gravosa para ellas. En este contexto, es fundamental reconocer el cuidado como una forma de trabajo profesional. Impulsar un enfoque más sostenible del cuidado implica también visibilizar a las mujeres fuera del sistema formal, y reconocer que, en ocasiones, el cuidado limita el acceso al mercado laboral.

Cerró el panel **Ximena Torres**, representante país en Colombia, Fundación Avina, que destacó la importancia de la corresponsabilidad y de la coherencia por ambas partes que suscriben el pacto. Explicó que es imperativo abordar el cuidado desde su interseccionalidad ya que el concepto de cuidado es multidimensional. En este contexto, el cuidado se vincula de manera interconectada con la resistencia climática. De ahí, resulta indispensable integrar la acción climática con los cuidados.

Desde la fila 0, **Natalia Moreno Salamanca**, directora de Cuidado en el Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza de Colombia destacó que el Pacto de Cuidados es un legado de los gobiernos progresistas de la región y que ahora debe fortalecerse regionalmente para avanzar hacia una verdadera sociedad del cuidado. Explicó que Colombia, bajo el plan “Potencia Mundial de la Vida”, se pregunta cómo cuidar la vida humana y no humana, y quién cuida a quienes cuidan. Por ello creó un Sistema Nacional de Cuidados basado en tres principios: reconocer el cuidado como derecho humano y autónomo, garantizar condiciones dignas para quienes cuidan y promover el cuidado colectivo. Esta política, que involucra a 15 ministerios, reconoce los derechos tanto de quienes reciben cuidado como de quienes lo brindan, y afirma que el cuidado debe ser también comunitario.

Desde las intervenciones del público, se reafirmó la importancia de vincular la agenda de cuidados con los derechos sexuales y reproductivos, garantizando la participación de personas con discapacidad y priorizando la inclusión de grupos históricamente marginados, como mujeres migrantes en condiciones precarias. Es clave transversalizar la perspectiva interseccional del cuidado, promoviendo la corresponsabilidad de los hombres mediante masculinidades cuidadoras y no violentas, reconocer profesionalmente el trabajo de cuidados y abordar su vínculo con la violencia política y la transformación sociocultural.

Sugerencias para la operativización del Pacto Birregional por los Cuidados:

- Garantizar la representación de juventudes, mujeres, afrodescendientes, pueblos indígenas y personas con discapacidad en foros y procesos de decisión.
- Promover iniciativas de sociedad del cuidado, incluyendo la protección del medio ambiente y la equidad de género, como parte de la construcción de sociedades sostenibles.
- Reconocer el trabajo no remunerado de cuidado como estratégico y central para la democracia y la cohesión social.
- Crear fondos de inversión y sistemas de valoración del cuidado, garantizando recursos suficientes para políticas efectivas.
- Integrar la agenda de cuidados con acción climática y sostenibilidad, fortaleciendo la resiliencia comunitaria.
- Vincular los cuidados con derechos sexuales, reproductivos y participación ciudadana, promoviendo la transformación sociocultural y la cohesión social.
- Promover la corresponsabilidad social y masculina en las tareas de cuidado, reduciendo la sobrecarga de las mujeres.

Cohesión Social e Inclusión frente a las Desigualdades

La moderadora, **Jessica Vidales Ferro**, coordinadora de la Coalición por la Defensa de los Derechos de los Poblaciones Refugiadas, Migrantes y Desplazadas en América Latina y el Caribe, (Coalición LAC RMD) abrió el panel destacando los desafíos para construir una cohesión social real en América Latina y el Caribe, en un contexto de crisis humanitaria marcada por la violencia, el desplazamiento y la desigualdad. Recalcó la necesidad de construir sociedades más justas e inclusivas y llamó a fortalecer la cooperación birregional y el rol de la sociedad civil en la reducción de las desigualdades.

Francisco Mantilaro, vocal de la Comisión Directiva de Red Encuentro, identificó que el problema al que se enfrenta hoy en día la región de América Latina y el Caribe frente a la UE, es una clara asimetría del poder: una desigualdad que erosiona la cohesión social y los derechos civiles. Las sociedades viven una disociación que no es solo motor de la violencia, sino que define la manera en la que se construyen los modelos de desarrollo. La ausencia de una voluntad real para construir una agenda común es nítida. Por ello, es crucial generar condiciones de participación que garanticen un modelo de desarrollo equitativo y beneficioso para ambos.

Jared Ortiz González, director ejecutivo de Alianza de Organismos No Gubernamentales identificó tres pilares para el desarrollo de las naciones: invertir en salud, educación y protección social. La cooperación EU-LAC debe considerar la promoción de una salud universal y de alta calidad, la inclusión y la promoción de un sistema educativo sólido, así como la inversión en mecanismos de protección social-como pensiones y seguros de desempleo- que eviten la exclusión y fortalezcan el avance de la sociedad.

Desde el enfoque del desplazamiento forzado, **José Ramón Ávila**, director ejecutivo de ASONOG (Asociación de Organismos no Gubernamentales), llamó a la implementación de medidas de prevención. Recordó que la migración, reconocida como un derecho humano, hoy se convierte en un fenómeno de sobrevivencia ante la precariedad y carencia de espacio de empleo, el cambio climático, la violencia y el crimen. En este contexto, Global Gateway tiene que ser un catalizador de cooperación horizontal, universal y pública, invirtiendo en el conocimiento local, evaluando el impacto social y de género y promoviendo un desarrollo centrado en las personas.

Tania Sánchez, directora ejecutiva, Coordinadora de la Mujer, abordó las desigualdades desde la perspectiva de género, señalando que no se trata de un problema sectorial, sino estructural y transversal, porque atraviesa la economía, el acceso a la tierra y a los recursos y las estructuras de cooperación internacional. Según Sánchez, el foco de la cuestión es la desigualdad en la redistribución del poder, cuyo ajuste es necesario para construir sociedades más justas e inclusivas. Además, subrayó que los procesos de planificación de inversiones tienen que centralizar a las personas en el centro de la construcción de la política pública.

Myriam Ferran, directora general adjunta, DG INTPA, Comisión Europea, reafirmó la prioridad que la UE otorga a la educación y salud en el marco de Global Gateway como medida de reducción de las desigualdades. Además, reiteró el compromiso de la UE en diseñar proyectos con alto impacto social, asegurando inclusión y beneficios más amplios para las comunidades. Por ello, Myriam Ferran hizo referencia al marcador de desigualdades (Inequality Marker), un indicador diseñado por la Comisión Europea para medir el impacto de cada intervención usando una escala de valores, al fin de comprobar que realmente se produce un efecto concreto en la reducción de desigualdades. Recordó la importancia de desarrollar proyectos horizontales, para asegurar que en cada sector haya un impacto tangible en la reducción de desigualdades.

Desde el público **Sonia González Fuentes**, Coordinadora del programa Sociedades Inclusivas, de la UE explicó cómo el programa persigue potenciar la dimensión social de la agenda Global Gateway y contribuir a la reducción de desigualdades en la región, aportando dos ejemplos concretos. En México, apoyando la creación del Parque Nacional de Economía Circular de Tula, destinado a convertirse en el principal centro de reciclaje del país y un referente de sostenibilidad y justicia ambiental. El proyecto trabaja con recicladores de base- en su mayoría mujeres en situación vulnerable y en condiciones de informalidad- para integrarlos a sistemas de seguridad social y promover espacios comunitarios de cuidado con un enfoque intergeneracional, articulados con el Sistema Nacional de Cuidados. En Uruguay, la UE acompaña la transición hacia el hidrógeno verde, promoviendo procesos participativos que fortalezcan la consulta a las comunidades afectadas y su



involucramiento desde el inicio de los proyectos. Además, impulsa la profesionalización del trabajo de cuidados y la creación de alianzas público-privadas que combinen servicios e infraestructura, avanzando hacia una mayor igualdad de género.

En la segunda parte de la sesión, la moderadora invitó a los panelistas a reflexionar sobre como Global Gateway y las iniciativas birregionales pueden contribuir a reducir desigualdades. Los panelistas coincidieron en la importancia de promover medidas de desarrollo horizontales. Por su parte, Francisco Mantillaro subrayó la urgencia de construir un diálogo que fomente la diversidad y la inclusión, y de crear nuevos modelos de gestión que superen los sistemas excluyentes actuales. Según Jared Ortiz González, la horizontalidad implica trascender la lógica donante-receptor. Además, para medir el desarrollo, propuso superar indicadores tradicionales como el PIB y utilizar índices de pobreza multidimensionales aplicados a situaciones específicas, como el acceso a salud y educación. Tania Sánchez reiteró la importancia de la redistribución del poder, una financiación directa a la sociedad civil y una transformación fiscal que tenga criterios interseccionales, progresivos e inclusivos.

Sugerencias para fomentar la Cohesión Social y luchar contra las desigualdades:

- Diseñar proyectos horizontales y participativos, superando la lógica donante-receptor y priorizando el impacto local.
- Promover educación, salud y protección social universal como pilares para reducir desigualdades estructurales.
- Adoptar indicadores de desarrollo más allá del PIB, incluyendo métricas que permitan orientar mejor los fondos hacia la reducción de desigualdades.
- Fomentar la redistribución del poder y la transformación fiscal progresiva, asegurando que los beneficios lleguen a quienes más lo necesitan.
- Considerar la desigualdad histórica y las asimetrías de poder en la relación UE-LAC, asegurando espacios de diálogo horizontales y equitativos.
- Priorizar la cooperación centrada en las personas, no en intereses comerciales, incorporando la evaluación de impacto social, de género y ambiental.
- No separar la agenda de espacio cívico de la agenda de reducción de la pobreza.

Conclusiones principales y Declaración Conjunta

Durante esta sesión, los miembros del grupo de pilotaje tomaron el escenario para resumir las discusiones que tuvieron lugar en cada uno de los paneles y, presentaron el texto de la Declaración Conjunta de la Sociedad Civil, el cual recoge las recomendaciones oficiales del Foro (ver Anexo).

Susana Eróstegui, directora ejecutiva de la Red Boliviana para la Cooperación Internacional, representante de la Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de América Latina y el Caribe (MESA), explicó que, en la definición de la agenda, el grupo de pilotaje decidió incluir un panel de conclusiones antes del cierre del Foro, con el fin de obtener un análisis más preciso de los desafíos que enfrenta la sociedad civil y poder definir los pasos posteriores. Explicó que el análisis del contexto actual muestra tendencias preocupantes: aumento del autoritarismo, normalización de restricciones a las libertades y distorsión del rol autónomo y crítico de la sociedad civil. Esta instrumentalización limita su capacidad de incidir en políticas públicas y debilita las respuestas democráticas. Por ello, el Foro no debe sólo diagnosticar, sino también dotarse de capacidades para reaccionar frente a la criminalización y el cierre de espacios cívicos. El mensaje final debe instar a los gobiernos a reconocer el rol esencial de la sociedad civil y a construir alianzas estratégicas que transformen las condiciones de desigualdad y pobreza.

João Figueiredo, responsable regional para las Américas y el Caribe, Red Global para la Reducción de Desastres (GNDR), señaló que la sociedad civil percibe una regresión en su financiamiento y que la cooperación, incluida la Ayuda Oficial al Desarrollo, debe renovarse para proteger el espacio cívico y los derechos humanos. Subrayó la necesidad de usar indicadores de desarrollo más allá del PIB e incorporar justicia social, fiscal y sostenibilidad de la deuda como bases de la cohesión social y la paz. Expresó preocupación por inversiones como Global Gateway cuando priorizan intereses geopolíticos sobre las necesidades comunitarias, reclamando más transparencia y participación. Insistió en que la sociedad civil debe ser un actor estratégico en las alianzas, no solo beneficiaria. Concluyó que toda política birregional requiere

cláusulas vinculantes en derechos y democracia, porque sin una sociedad civil viva ninguna inversión producirá beneficios equitativos.

Marie L'Hostis, coordinadora de incidencia, FORUS Internacional, resaltó que nuestras sociedades dependen del trabajo de cuidados y que es necesario escucharse mutuamente para avanzar. Subrayó que, ante el aumento de desigualdades y el cierre del espacio cívico, es imprescindible cambiar paradigmas. Insistió en la importancia de trabajar de forma conjunta a nivel regional, nacional y local. Concluyó que el Foro es una invitación a hacer más y mejor, desarrollando nuevos enfoques que permitan avanzar sin dejar a nadie atrás.

Luciana Torchiaro, consejera regional para América Latina y el Caribe, Transparencia Internacional (TI) se focalizó en la corrupción, temática transversal a todos los paneles. Explicó que la corrupción se ha convertido en un motor del crimen organizado en varias regiones y en cómo estas redes han penetrado las instituciones democráticas. En muchos Estados, las instituciones están cooptadas y dejan de responder a la ciudadanía para servir a organizaciones criminales, formando redes entre funcionarios y actores criminales. Estas estructuras macro criminales, transnacionales, usan tecnología, abusan del sistema financiero internacional, lavan dinero en la economía real y generan impactos graves en la violencia, el medio ambiente y en comunidades vulnerables, incluidos niños reclutados y mujeres víctimas de trata. Algunas respuestas estatales recurren a la violencia, restringiendo aún más los espacios cívicos. Por ello, el panel propone una estrategia birregional, coordinada y multi-actor, basada en datos y plenamente respetuosa de los derechos humanos.

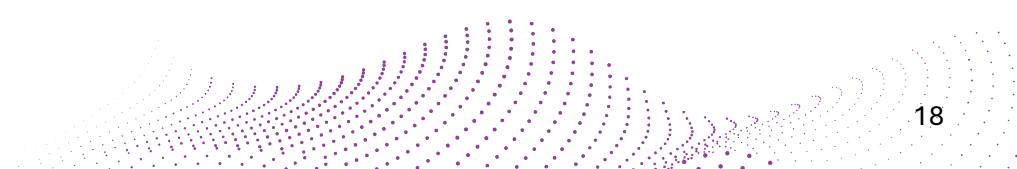
Carla Álvarez, representante del Foro Europeo de la Juventud habló de cómo la transición digital se vinculó al hilo conductor del Foro por su impacto en el aumento de las desigualdades, ya que la tecnología no es neutra y, sin un enfoque de derechos humanos, puede profundizar brechas existentes. Se destacó que la falta de acceso a internet afecta derechos como educación, trabajo o participación pública. Por ello, se necesita acceso universal, conectividad sostenible, protección de datos y alfabetización digital crítica. Además, es imperativo transformar los modelos de conectividad hacia esquemas comunitarios y corresponsables entre gobiernos, sociedad civil y sector privado.

Fany Kuiru Castro, coordinadora general, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) destacó que los pueblos indígenas son actores políticos con derechos de autodeterminación y gobernanza propia, cuyos conocimientos tradicionales deben dialogar con la ciencia para enfrentar la crisis climática. Con iniciativas como 30x30 y 80x25, buscan conservar y restaurar la biodiversidad amazónica para 2030. Su aporte es clave para resolver problemas globales y promover un desarrollo equitativo. El Global Gateway puede ser una herramienta para apoyar el buen vivir y fortalecer la protección de sus territorios frente al extractivismo.

Danilo Salerno, director regional Américas, Alianza Cooperativa Internacional-LAC, abordó la temática de los sistemas alimentarios, agenda prioritaria en la región, y vinculados con la agenda de los cuidados. Se ha reducido la pobreza y el hambre gracias a políticas integradas, inclusión y mecanismos de diálogo, y se busca garantizar alimentos saludables y nutritivos para todos. Se destaca la importancia de los conocimientos indígenas y juveniles en la producción y seguridad alimentaria, con 2026 como Año Internacional de la Mujer Agricultora como oportunidad.

João Figueiredo volvió a hablar de justicia climática, explicando que esta combina tres dimensiones: distributiva, procesal y de reconocimiento, abordando desigualdades en la carga y beneficios del cambio climático, la participación en decisiones y la inclusión de todos los saberes. Recordó que construir sociedades resilientes requiere fortalecer la participación de quienes están en primera línea y potenciar la labor de la sociedad civil. Los marcos globales como el Acuerdo de París y la Agenda 2030 deben implementarse localmente, centrando inversiones en las comunidades. La resiliencia climática debe guiar la cooperación birregional, promoviendo cohesión social, democracia y reducción de conflictos. Se requieren protocolos inclusivos de gestión de riesgos e inversión en ciencia, investigación e inteligencia climática.

En conclusión, **Inma Alonso Delgado**, responsable de Relaciones UE-ALC y Financiación para el Desarrollo, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, España (miembro de CONCORD) habló de la importancia del trabajo de la sociedad civil entre una cumbre birregional y la siguiente. Destacó tres ideas clave para poder potenciar la efectividad del trabajo de la sociedad civil: trabajar de manera articulada y horizontal para amplificar resultados, trasladar propuestas a los Estados asegurando que cumplan sus compromisos, y evitar que la declaración quede en papel mojado. Se propone crear un mecanismo multiactor birregional para



dar seguimiento a la agenda con participación activa de la sociedad civil. Desde el cierre de cada cumbre, la agenda debe trabajarse de manera inmediata y coordinada hasta la siguiente reunión.

Participación de la Sociedad Civil

El moderador, **Sergio Chaparro**, coordinador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), abrió el panel invitando los panelistas a reflexionar sobre la crisis de la democracia y del Estado de derecho, destacando el papel esencial de la sociedad civil como actor de paz y pilar de sociedades justas, inclusivas y sostenibles, así como promotora del desarrollo. En este contexto, Chaparro advirtió sobre las crecientes restricciones y recortes financieros que le impiden actuar, y reiteró la necesidad de presentar propuestas concretas a las autoridades para garantizar su participación efectiva, su financiamiento sostenible y su protección dentro de la asociación birregional UE-CELAC.

Lucy Garrido, coordinadora de las iniciativas Diálogos Consonantes, Isoquito y Causa Abierta, Articulación Feminista Marcosur (AFM), destacó que la participación es sinónimo de construcción, y que es imperativo establecer un mecanismo sólido de participación de la sociedad civil y seguimiento de sus actividades. Destacó que la sociedad civil pide la realización de una participación realmente activa, política, y absolutamente democrática, que promueva una democracia fuerte y responsable.

Siguió **Magdalena Bordagorry**, coordinadora de Políticas y Redes, Red EU-LAT, quien expresó su preocupación por la reducción del espacio cívico, tanto en Europa como en América Latina, que amenaza el multilateralismo y el espacio democrático. Borgagorry explicó que muchos países en ambas regiones están virando hacia el autoritarismo, y es fundamental que la agenda de espacio cívico vaya de la mano con la reducción de la pobreza. En un contexto de crisis global, preocupa que Europa enfoque su agenda en seguridad, propuestas de comercio e inversión que no respeten los principios de participación y sostenibilidad. Por ello, reiteró la importancia de que cualquier inversión europea en la región involucre a la sociedad civil local con mecanismos transparentes de consulta.

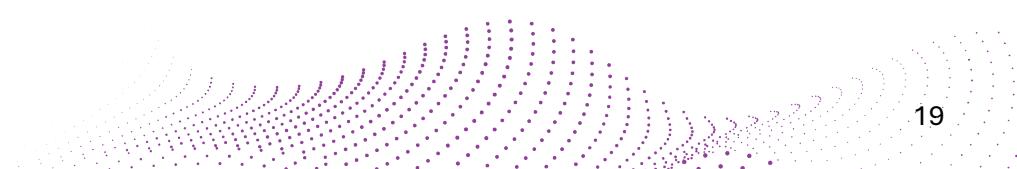
Anna Ferreira coordinadora de Participación Juvenil, CIVICUS (Red global por la participación ciudadana), identificó en la falta de inversión en infraestructura para la sociedad civil como una de las causas de la crisis económico-política de países como Venezuela y recalcó el rol que los jóvenes pueden asumir en el pacto birregional. Recordó que, en muchos contextos, la sociedad civil se encarga de donar servicios donde el estado se rechaza, pero reiteró que no se puede hablar de una verdadera participación sin que esa incluya también a los jóvenes, que, de momento, no tienen acceso a los espacios de toma de decisión institucionales.

Carlos Quirós, oficial de Planificación Estratégica, Grupo Social ONCE, reiteró el rol de la sociedad civil como contrapeso del estado, y explicó que la sociedad civil tiene una representatividad directa, ya que está implicada en el cambio desde la implicación personal. Quirós recordó que, desafortunadamente, hoy en día la protección de la sociedad civil ya no es garantizada y por ello, sus representantes ven sus vidas amenazadas.

Claudia Paz y Paz, directora del Programa México y Centroamérica, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), acentuó la importancia de la creación de un entorno habilitante como presupuesto fundamental de la participación de la sociedad civil. Explicó que donde los estados fallan, es imperativo que las organizaciones internacionales introduzcan mecanismos de protección válidos. Por ello, es fundamental, entre otras cosas, que la sociedad civil tenga acceso a la información y que participe plenamente en los procesos de toma de decisión.

Nelson Javier Restrepo Arango, director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia destacó que la diplomacia humanitaria, la dignidad humana y el ejercicio de los derechos humanos son la prioridad. Involucrar las comunidades garantizando una participación plena y efectiva es fundamental, ya que ellas también son transformadoras del territorio y catalizadoras del cambio.

Marlene Holzner, jefa de unidad para Autoridades Locales, Sociedad Civil & Fundaciones, DG INTPA, Comisión Europea, elogió el papel crucial de la sociedad civil en América Latina y Caribe como catalizadora del cambio y por su resiliencia en tiempos de crisis. Destacó la capacidad de la sociedad civil en la región como ejemplar, en construir sociedades más inclusivas y sostenibles. En este contexto, destacó que la UE reafirma su firme apoyo a la sociedad civil de la región, reconociendo su rol fundamental en el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo. Además, mencionó los mecanismos de DG INTPA para consultar a la sociedad civil:



a nivel local con las Delegaciones de la UE a través de las Hojas de Ruta de la Sociedad Civil y en Bruselas mediante reuniones periódicas organizadas a través del PFD, así como la intención de continuar y fortalecer el diálogo con la región.

Durante la sesión, el público también hizo varias recomendaciones clave para fortalecer el Foro y garantizar que sea realmente participativo y democrático. Primero, se destacó la necesidad de abordar el impacto del bloqueo económico y la falta de financiación, que limita el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la región. En cuanto a los temas ambientales, se propuso un enfoque ecosistémico, no antropocéntrico, en el cuidado de la vida. Además, se instó a las instituciones a ser más empáticas y solidarias con las realidades de América Latina y Caribe. Se subrayó la falta de equilibrio en los acuerdos globales, particularmente en relación con el historial colonial de Europa en la región, y se pidió que los diálogos se traduzcan en acciones concretas, más allá de los intereses comerciales. Por último, se hizo un llamado urgente para lograr apoyo político en contextos de crisis democrática, especialmente en lo que respecta a la protección de las mujeres defensoras de derechos humanos y los niños afectados por la violencia y la exclusión social.

Sugerencias para potenciar el espacio cívico:

- Participación plena y representativa: Garantizar la inclusión de comunidades locales, juventudes, mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad en todos los procesos de decisión y planificación de proyectos.
- Protección y financiamiento sostenido: Crear un entorno seguro y habilitante para la sociedad civil, con fondos regulares, accesibles y protegidos frente a ataques legales o restricciones.
- Cooperación centrada en la persona: Priorizar la cooperación que ponga al ser humano y la justicia social en el centro, con enfoque de género, ambiental y de derechos humanos.
- Equidad y diálogo horizontal: Superar asimetrías de poder y garantizar espacios de negociación equitativos, incorporando voces históricamente subrepresentadas, como el Caribe y comunidades indígenas.
- Sostenibilidad y cuidado: Reconocer el trabajo de cuidado no remunerado y promover la sociedad del cuidado como eje de democracia, cohesión social y protección ambiental.
- Transparencia y rendición de cuentas: Asegurar que inversiones y proyectos tengan mecanismos claros de seguimiento, indicadores más allá del PIB y responsabilidad en el uso de los recursos, incluyendo garantías de que los fondos se destinen realmente a cambios concretos y no a intereses personales.

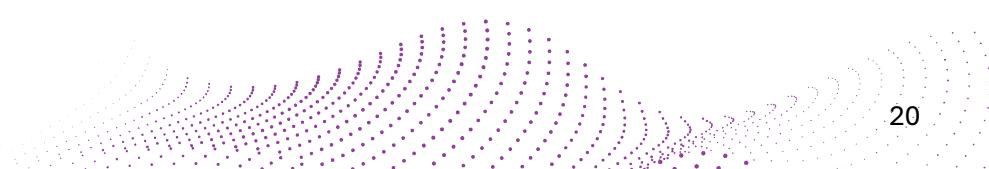
Cierre Institucional

El cierre institucional, facilitado por **Félix Fernández-Shaw**, DG. INTPA, Comisión Europea, clausuró dos días de discusiones en el marco del Foro de la Sociedad Civil ALC-UE. Félix Fernández-Shaw recordó que la cooperación birregional debe basarse en valores compartidos, inclusión y diálogo constante entre gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales.

Mauricio Jaramillo Jassir, viceministro de Asuntos Multilaterales, Gobierno de Colombia, elogió el papel fundamental que la sociedad civil colombiana ha jugado en pilares como la descarbonización y la transición ecológica. En este contexto, reiteró que la política no puede perdurar sin participación de la sociedad civil, y que es necesario que su apoyo y soporte sobrevivan los ciclos políticos. Reafirmó que el gobierno colombiano cree en la democracia, en el multilateralismo y en el derecho internacional, pero por ello, cabe responder a las necesidades de la sociedad civil en manera sistemática.

Siguió **Gabriel Mato**, copresidente de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana (EuroLat), europarlamentario PPE, que también reafirmó la necesidad de restablecer un organismo permanente de consulta con la sociedad civil y de abordar temas clave como migración, derechos humanos y lucha contra el crimen organizado. El contexto geopolítico actual impulsa una mayor cooperación, basada en valores compartidos que deben reflejarse en el pacto birregional. La UE, como socio fiable, promueve relaciones de igualdad y un comercio inclusivo y sostenible.

Martín Vidal, embajador, director general para Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, representante de la Troika CELAC, advirtió que la falta de credibilidad en la burocracia afecta la democracia, y que, sin diálogo y alternativas claras, los nacionalismos y la ley del más fuerte podrían ganar terreno. En un mundo amenazado, es crucial un multilateralismo inclusivo, conectado con la realidad cotidiana,



y con una articulación efectiva entre gobiernos y sociedad civil. Cada tema, como desarrollo social, salud y género, debe tener un impacto real y ser transversal en todas las iniciativas y trabajos.

Gianpiero Leoncini, vicepresidente ejecutivo, CAF, recordó que la sociedad civil juega un papel crucial en garantizar la transparencia en los bancos de desarrollo, colaborando en el diseño de políticas públicas y fortalecimiento institucional. Se han creado redes con gobiernos locales para promover biodiversidad, microemprendimientos y desarrollo comunitario, tanto en la región como en la alianza con la UE. Recomendó que las inversiones deben traducirse en mejoras reales para la vida de las personas, abarcando áreas como el clima, la digitalización y la cohesión social, con un enfoque verde.

João Figueiredo, responsable regional para las Américas y el Caribe, Red Global para la Reducción de Desastres (GNDR), del grupo de pilotaje, aprovechó de la sesión para reafirmar los puntos claves de la Declaración Conjunta, incluidas las recomendaciones de la sociedad civil a la UE y a los gobiernos de América Latina y Caribe.

Olga Montúfar, presidenta Red de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes con Discapacidad LAC (REMIAD), reafirmó que la cooperación entre la UE y América Latina sólo será legítima si refleja la diversidad de sus sociedades, incluyendo a mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidades. Es necesario establecer una alianza birregional que ponga los derechos humanos y la transparencia democrática en el centro de las políticas, garantizando una sociedad de bienestar inclusiva. Defender la libertad de expresión, la independencia judicial y la protección de periodistas es esencial para generar confianza. Por ello, se requiere un compromiso real con mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas para asegurar que las promesas se cumplan.

En conclusión, la cooperación birregional debe basarse en valores compartidos, inclusión y diálogo constante entre gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales. Temas como migración, seguridad, crimen organizado, igualdad de género y desarrollo social deben integrarse transversalmente en todas las iniciativas. La sociedad civil también actúa como garante en la gestión de fondos, asegurando que la inversión tenga un impacto real en la vida de las comunidades. Redes locales y alianzas internacionales son vitales para la cohesión social, la protección ambiental y la resiliencia comunitaria. Solo con su participación activa se puede construir un desarrollo sostenible, justo e inclusivo para toda la región.

Anexo

Declaración Conjunta de la Sociedad Civil ALC-UE

Foro de la Sociedad Civil ALC-UE | Santa Marta, 7-8 de noviembre de 2025

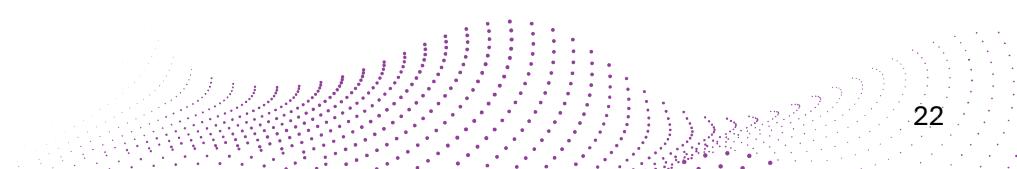
1. Reunidas en el Foro de la Sociedad Civil de América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Santa Marta, Colombia, las organizaciones representantes de sindicatos, redes, pueblos indígenas, mujeres, comunidad LGTBIQ+, juventudes, cooperativas y entidades sin fines de lucro, subrayamos la importancia de que las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) reconozcan la participación significativa, inclusiva, intergeneracional y multisectorial como condición para fortalecer una asociación birregional justa, democrática, sostenible y basada en la Carta de Naciones Unidas y los derechos humanos, que sitúe en el centro a las personas y las comunidades – incluidas las rurales, migrantes, afrodescendientes, con discapacidad y otras históricamente excluidas.

2. Frente a crisis interconectadas que amenazan la cohesión social, ambiental y económica y que profundizan las desigualdades, la pobreza y la pérdida de espacios democráticos –incluidas las que afectan de manera particular a los países insulares del Caribe, altamente expuestos a la crisis climática, y las vulnerabilidades económicas–, reafirmamos el valor de la paz y el papel esencial de la sociedad civil, las juventudes y los gobiernos locales como actores de paz y contrapeso democrático. Recordamos el carácter de ALC y UE como regiones que deben mantenerse libres de guerra y toda forma de violencia. Llamamos a las y los líderes participantes en la IV Cumbre CELAC-UE a asumir compromisos ambiciosos y medibles que fortalezcan la cooperación horizontal, participativa e inclusiva, basada en la transparencia, justicia social y sostenibilidad.

3. Llamamos la atención sobre los riesgos del debilitamiento del Estado de derecho y de la institucionalidad democrática, así como de la reducción del espacio cívico, la desinformación y la polarización, que erosionan la cohesión social. En línea con el Acuerdo de Escazú, instamos a garantizar un entorno propicio para la participación significativa de la sociedad civil, personas defensoras, periodistas y medios de comunicación, asegurando su independencia, seguridad, legitimidad y sostenibilidad. Asimismo, pedimos asegurar información accesible y de tecnologías asistivas que garanticen la participación plena de las personas con discapacidad, junto con la transparencia y acciones concretas que fortalezcan la democracia, el pluralismo político y la participación de la sociedad civil en las políticas públicas.

4. Remarcamos que la IV Cumbre CELAC-UE debe reafirmar el compromiso con la justicia climática, la autodeterminación y gobernanza de los Pueblos Indígenas, comunidades rurales, afrodescendientes y locales, y con los sistemas alimentarios, energéticos y educativos sostenibles, la biodiversidad y la resiliencia climática comunitaria. Se debe priorizar el financiamiento directo, accesible y sostenible; la reparación y protección de los territorios —incluidos sistemas de alerta y acción temprana, y gestión local del riesgo, alineados con el Marco de Sendai y el Acuerdo de París—; la prevención del desplazamiento forzado asociado a crisis climáticas, así como el acceso equitativo a la tierra, el agua y el apoyo diferenciado a mujeres y juventudes rurales, comunidades campesinas, indígenas y personas con discapacidad. Es fundamental fortalecer los sistemas educativos públicos y promover sistemas alimentarios soberanos y sostenibles, impulsando una agro-economía circular que valorice la agricultura familiar, los emprendimientos juveniles en el ámbito agrícola y los saberes comunitarios, garantizando la participación activa de la sociedad civil en el diálogo sobre sistemas alimentarios, en línea con el Plan SAN-CELAC 2030 y el ODS 2. Asimismo, pedimos el desarrollo de sistemas integrales de datos que fortalezcan la toma de decisiones basadas en evidencia. Es vital proteger la Amazonía viva y otras masas boscosas de la región, reconociéndolas como prioridades políticas y éticas de los Estados de la CELAC. Toda cooperación debe garantizar la seguridad jurídica de los territorios, el pleno Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y la participación efectiva de los Pueblos Indígenas en las decisiones que los afecten.

5. Creemos necesario redefinir el desarrollo más allá del PIB, priorizando la reducción de desigualdades y el cierre de las brechas de financiamiento que frenan los ODS. La cohesión social debe reconocerse como una condición indispensable para revertir desigualdades, fortalecer la confianza ciudadana y consolidar democracias inclusivas mediante políticas redistributivas y sistemas de protección social basados en derechos. Vemos con preocupación los recortes en cooperación internacional, ayuda humanitaria y Ayuda Oficial al



Desarrollo (AOD), así como el aumento del gasto militar, cuyos recursos deberían destinarse al desarrollo económico y social birregional. Por ello, pedimos cumplir con los compromisos en AOD, alcanzar el 0,7% del PIB y mejorar su calidad para que sea progresiva, flexible y con métricas sociales y climáticas, garantizando el acceso directo al financiamiento para las OSC locales. Reconocemos además las contribuciones de las personas migrantes a las economías de ambas regiones, a través de remesas, trabajo y aportes fiscales. La inversión birregional debe ser transparente y contribuir a la Agenda 2030. El comercio y las inversiones solo serán sostenibles si garantizan democracia, derechos humanos y protección ambiental. Llamamos a los Jefes de Estado y de Gobierno a adoptar compromisos –incluyendo acuerdos comerciales o mecanismos como la Global Gateway o UE-Mercosur– incluyan cláusulas vinculantes en derechos humanos, laborales y medioambientales; mecanismos de denuncia y participación de la sociedad civil como socia estratégica en su diseño y monitoreo, incluso en alianzas multiactor complementarias, que involucren recursos del sector privado y la filantropías. La Agenda Global Gateway no debe reemplazar la AOD tradicional y debe responder a las prioridades reales de las comunidades, evitando enfoques centrados solo en la infraestructura.

6. Reafirmamos que sin igualdad de género y la plena autonomía económica, física y política de las mujeres, niñas, y juventudes en todas sus diversidades, no hay democracia. Saludamos como punto de partida en el camino hacia esa igualdad sustantiva la adopción del Pacto Birregional por los Cuidados, y demandamos el reconocimiento del cuidado como derecho humano, bien público global y pilar del bienestar; medidas que garanticen los apoyos, y para erradicar todas las formas de violencias machistas y de género; así como la plena participación de la sociedad civil en la implementación, seguimiento y rendición de cuentas del Pacto.

7. En tiempos de transformación digital, recordamos que la tecnología no es neutra y, sin un enfoque de derechos humanos, puede profundizar desigualdades. Por ello, es fundamental incorporar criterios de derechos, sostenibilidad, rendición de cuentas y gobernanza democrática en la Alianza Digital ALC-UE y en el Global Gateway Digital. Debe garantizarse la conectividad asequible, la alfabetización digital crítica y universal y la seguridad en línea —especialmente para mujeres, niñas y personas con discapacidad y comunidades rurales—, así como promover tecnologías asistivas que impulsen la inclusión.

8. Conscientes de que el crimen organizado y la corrupción amenazan la democracia y el bienestar, urge reforzar las estructuras de diálogo birregional y avanzar hacia políticas públicas más homogéneas, preventivas y basadas en evidencia. Reiteramos la necesidad de instituciones fuertes, rendición de cuentas y transparencia, así como el fortalecimiento de capacidades técnicas y tecnológicas de las instituciones públicas para acelerar las investigaciones y garantizar el Estado de derecho. Es fundamental proteger a periodistas, fiscales y personas defensoras que investigan y denuncian casos complejos, armonizar marcos normativos, regular facilitadores del lavado de dinero y garantizar registros transparentes de beneficiarios finales. Frente a amenazas híbridas como la desinformación, el cibercrimen y la criminalización, se requiere una respuesta coordinada y efectiva que ponga los derechos humanos en el centro de toda acción birregional.

9. Reafirmamos que la cohesión social, la igualdad, los derechos humanos, la justicia climática y la democracia participativa son los pilares de la asociación estratégica CELAC-UE. La IV Cumbre CELAC-UE debe asumir compromisos para transversalizar la perspectiva de género e interseccionalidad, erradicar todas las formas de violencia, discriminación, racismo, xenofobia y discursos de odio, promover la integración de personas con discapacidad, refugiadas, migrantes y desplazadas, y garantizar salvaguardas sociales, ambientales, de biodiversidad y derechos humanos en todas las políticas e inversiones birregionales. Reconocemos a las juventudes y niñeces como actores estratégicos de la democracia y del desarrollo sostenible, cuyo papel debe fortalecerse mediante la educación, el empleo digno, la movilidad académica y la participación intergeneracional efectiva. Exhortamos a los Estados a fortalecer el espacio cívico y e inclusión efectiva de movimientos sindicales y sociales, juventudes, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas refugiadas, migrantes y desplazadas, con discapacidad, y comunidades marginadas, y garantizar derechos —incluido el acceso al trabajo decente, la vivienda digna, la educación, la salud, los cuidados y la protección social— en la construcción de sociedades democráticas, justas, sostenibles y pacíficas

10. Para que estas propuestas sean sostenibles, la IV Cumbre CELAC-UE debe formalizar un mecanismo birregional multiactor de seguimiento y diálogo, con participación efectiva y accesible de la sociedad civil organizada, los sindicatos, los movimientos de mujeres, juventudes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, caribeñas e insulares, rurales y con discapacidad, los gobiernos locales, la academia, las empresas cooperativas y de la economía social, el sector privado y otros actores interesados. Se recomienda

fortalecer y adaptar los espacios ya existentes de participación de la sociedad civil, garantizando su sostenibilidad, inclusión y capacidad de incidencia. Solo con una voz ciudadana fuerte y reconocida se podrá construir una cooperación legítima, eficaz y transformadora.

La sociedad civil no pide espacio: ya lo ocupa, lo construye y lo defiende. No hay desarrollo sin derechos, no hay justicia sin igualdad, no hay futuro sin democracia.

Santa Marta, 8 de noviembre de 2025

Foro de la Sociedad Civil ALC-UE

ORGANIZACIONES ADHERIDAS

ACCIÓN Asociación Chilena de ONGs	Civil Rights Defenders
ACICAFOC: Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria en Centroamérica	CLAC FAIRTRADE
Acodea	CLACSO
ActionAid	Clima de Política
Alcaldía Municipal de Mahates (UMATA)	Climate Action Network América Latina (CANLA)
Alfombra Roja	Climate Action Network Europe
Alianza de Organizaciones para la eficacia del Desarrollo (AOED-ALYC)	Coalición LACRMD
Alianza Global por los Derechos Humanos	Coalición Nacional de Mujeres Rurales, A. C.
Alianza Migrante	Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria
Alianza ONG	Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP)
Aluna Minga.e.V.	Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
ArteCultivos	Conlactraho
Articulación Feminista Marcosur	Consejo de la Juventud de España
ASICADH asociación internacional defensores de los derechos humanos	Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca
Asociación de Género por la Paridad	Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en México, (DMRKM)
Asociación Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (CECADE)	Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA)
Asociación ciudadana por los derechos humanos	Corporación Comunicación, Territorio y Resistencia
Asociación Civil Pata Pila	Corporación Viva la Ciudadanía
Asociación Civil Razonar	Cotidiano Mujer
Asociación Coordinadora de la Mujer	Creación Positiva
Asociación de Trabajo Interdisciplinario	Cristosal
Asociación Nacional de Centros Perú	DECA Equipo Pueblo
Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (ANONG)	Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula por México	Derechos Digitales
Ayuda en Acción	Diakonia Colombia
Broederlijk Delen	Diálogos Nacionales Esquel
CAI - Conversas Associação Internacional	Ecolserra Export SAS BIC
Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación	Ecuamur
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación	enlaces territoriales para la equidad de genero
CARE	Erandi Aprende
Casa Neon Cunha	European Network on Debt and Development (Eurodad)
Católicas por el Derecho a Decidir Argentina	FECORACEN
Center for Engagement and Advocacy in the Americas (CEDA)	Federación Internacional Fe y Alegría
Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad (Dejusticia)	FOAL
Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF)	Foro Ciudadano para las relaciones CELAC-UE
Centro de Justicia y Paz (Cepaz)	Foro Indígena de Abya Yala - Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y El Caribe
Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos (CEDEAL)	Forum Solidaridad Perú
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)	ForumCiv
CIMUNIDIS CHILE	Forus International
Círculo de Políticas Ambientales	FP2030/CEMOPLAF
CISCSA - Ciudades Feministas	Fundación Agape en Colombia
Ciudad Alternativa	Fundación Internet Bolivia
	Fundación Multitudes
	Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD)
	Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
	Fundación para Estudio e Investigación de la mujer (FEIM)

Fundación Paso a Paso AC México	Red encuentro (encuentro de entidades no gubernamentales para el desarrollo)
Fundación REDUBUNTU - Soy Porque Somos	Red EU-LAT
Fundación Sembrando Esperanza (FUNDASE)	Red Europea OIDHACO (Oficina Internacional Derechos Humanos - Acción Colombia)
Fundación tiempo de cambios	Red Internacional de Diplomacia Feminista por la Paz
FUNSALEPRODESE	Red Jubileo Sur
FUNSAREP	Red juvenil de Mujeres Chocoanas
Ges Asociación Civil	Red Latinoamericana por Justicia Económica, Social y Climática
GFLAC	LATINDADD
Global Infancia	Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia -
Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE)	RedLAD
Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil CELAC/UE	Red Mujer y Habitat - LAC
Grupo Social ONCE	Red Nacional de Mujeres de Colombia
Hivos	Red por los derechos de las personas con discapacidad Redi
Humanity & Inclusion	Red sin fronteras RSF
Incidencia Feminista	RedClara
Incidencia Feminista Asociación Civil	Redes Chaco
Institut de recherche pour le développement	Soldepaz.Pachakuti
Instituto afrodescendiente para el estudio la investigación y el desarrollo	SOLIDAR
Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)	Sonando Asociación Civil
Instituto Popular de Capacitación - IPC	SwTI - Street work Training Instituto
International Cooperative Alliance - ACI Americas Region	Tamukke Feminist
JUVENTUDES DIVERSAS POR LA VIDA	TEDIC
Juventudes diversas por la vida (YSB COLOMBIA)	The Center for Non-Violence, Research and Development
La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo	The Millennials Movement
La Ruta del Clima	Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco
LANPUD	Transparencia por Colombia
Latin America and The Caribbean Women's Network for Disaster Risk Reduction	Transparency International
Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de América Latina y El Caribe	Trócaire
Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres	UN/EU Youth Advisory Group
Movilizatorio	Unidad de organizaciones Afrocaucanas
Movimiento Mujeres Luna Creciente	Unión de Trabajadores del Llano (Plataforma Colombiana de derechos humanos democracia y desarrollo)
Movimiento Por la Paz (MPDL)	Unión Latinoamericana de Ciegos
Movimiento Tzuk Kim-pop	Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS)
Nacionalidad Originario A'i Kofan del Ecuador - NOA'IKE	Unión Venezolana en Perú
Observatorio de los derechos Sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad (ODISEX), Perú	Universidad de la Rioja España
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia e.V. (Alemania)	Venezolanos En Barranquilla
OIKOS Cooperación y Desarrollo ONGD	UNIR
OIVA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL VALORAMOS EL AMBIENTE	WINGS
Olof Palme International Center	WSM
ONG ALLATRA MIS COLOMBIA	WWF LAC
ONG Amaranta	Young Professionals for Agricultural Development (YPARD)
Organismo Cristiano de Desarrollo integral de Honduras	Youth Sounding Board Costa Rica
Organización de Colombianos Refugiados en Chile (OCORH)	YPARD
OXFAM	
Pacta Serenada e. V.	
Pater Ahlbrinck Stichting	
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo	
Plataforma de Acción Cívica Centroamericana, PACC.	
POJOAJU	
Progetto Sud	
PROPOSITO PERU Marushka Chocobar	
Protección Internacional Mesoamérica	
Red de Católicas por el Derecho a Decidir de LAC	
Red de Coaliciones Sur defendiendo los derechos de niñas, niños y adolescentes en Latinoamerica	
Red de defensoras del ambiente y el buen vivir de Argentina	
Red de Mujeres Amazónicas	
Red de mujeres indígenas y afrodescendientes con discapacidad de ALC	
Red Ecofeminista Lac	
Red Ecolsierra	